Globethics Repository



Movimientos vecinales y redes de trueque [Neighborhood movements and barter networks]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Candia, José Miguel
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-15 17:26:58
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218993

Movimientos vecinales y redes de trueque

¿Hacia una sociedad alternativa?

José Miguel Candia

Durante los primeros años 80, surgen en varios países de América Latina organizaciones sociales que agrupan a vecinos y pobladores preocupados por ser los protagonistas encargados de resolver los problemas de sus comunidades. Estos movimientos vecinales representan una nueva modalidad de participación ciudadana y gestión de los intereses colectivos y expresan, al mismo tiempo, una profunda desconfianza hacia los antiguos partidos. El fenómeno es resultado de la confluencia de diversos factores, entre los que cabe destacar, los efectos de descomposición y debilitamiento que provocaron los programas neoliberales en la clase obrera industrial y las fuerzas políticas vinculadas a ella. En este artículo se describen las experiencias del movimiento vecinal en Argentina, como un caso paradigmático de este proceso de aparición de agrupamientos comunales divorciados de los partidos políticos y en abierta competencia con ellos.

Inicio y fin de siglo. Son años particulares para nuestros países. Los cambios derivados de las políticas de modernización capitalista hicieron tabla rasa con buena parte del abultado aparato estatal que se construyó en los últimos 40 años. Se cambió el carácter y se redujeron las funciones de las instituciones de seguridad social, fue amputado un segmento importante de la antigua industria nacional que se reconvirtió en plantas maquiladoras o mutó en oficinas gestoras de importaciones. Se cancelaron los subsidios y créditos sobre los cuales se instrumentaron las políticas de estímulo a los productores locales e hicieron posible que se otorgara un generoso apoyo al consumo popular.

José Miguel Candia: sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Autónoma de México; colaborador en diversos periódicos y en varias revistas especializadas; investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la UNAM, México

Palabras clave: movimientos sociales, vecinalismo, pobreza, Argentina.

Escenario: el proceso de reestructuración capitalista

No exageran algunos investigadores cuando dicen que la situación social de América Latina es un escándalo[1]. A mediados de los años 90, 46% de los habitantes de la región vivía en la pobreza y casi la mitad de ellos eran indigentes carentes de los más elementales recursos para atender necesidades fundamentales. El número de pobres era, a finales de siglo, mayor que a comienzos de la década de los 70. Para 1995 se estimaban 200 millones de pobres, 80 millones más que los registrados en 1970. La cifra, por sí sola apabullante, incluye 95 millones de indigentes, 30 millones más que los identificados hace 30 años[2]. No obstante, el problema no se agota en el conteo de pobres ni en la expresión de asombro que esas cifras pueden provocar. Existe otro indicador social igualmente aterrador, se trata del aumento de la desigualdad: los ricos son ahora más ricos y el incremento de la cantidad de familias *carenciadas* –de acuerdo al eufemismo que adoptaron algunos gobiernos para dirigirse a los grupos que viven en condiciones de pobreza extrema– parece estar fuera del control de las políticas públicas. La situación que se describe incluye a todas las naciones del área. Algunos países que ha-bían sido excepciones parciales a la regla –en particular los casos de Argentina y Chile– incrementaron notoriamente la pobreza y la desigualdad. Apenas Uruguay y Costa Rica mantuvieron, parcialmente, las condiciones previas a la catástrofe de los 80. Puede apuntarse una experiencia extraña y solitaria de mejoría relativa; se trata de Colombia, que logró reducir la brecha de desigualdad social y pobreza pero partiendo de niveles de marginalidad más altos que los registrados en los países que se mencionan anteriormente. Si se analiza la cuestión social a partir de la lectura de otros indicadores como mortalidad infantil, esperanza de vida y alfabetización, el panorama es algo más alentador, sin embargo en los últimos 30 años el acceso de las familias pobres a los servicios sociales empeoraron. De las naciones que iniciaron de manera más temprana la construcción institucional que los sociólogos y políticos europeos llamaron Estado de bienestar, únicamente Uruguay logró escapar a este proceso de decadencia generalizada[3].

Los efectos de las políticas de reestructuración capitalista sobre el mundo del trabajo han sido particularmente significativos. Un primer fenómeno, de fácil identificación sin necesidad de recurrir a una indagación estadística detallada, es la generalización de formas atípicas de empleo y la degradación de las condiciones laborales. La vastísima producción bibliográfica que se ha dedicado al estudio del tema coincide en agrupar este tipo de actividades laborales bajo la conceptualización común de *precariedad ocupacional*. No es

1. Guillermo O'Donnell: «Pobreza y desigualdad en América Latina: algunas reflexiones políticas» en Víctor Tokman y Guillermo O'Donnell (comps.): *Pobreza y desigualdad en América Latina. Temas y nuevos desafíos*, Paidós, Buenos Aires, 1999.
2. G. O'Donnell: ob.cit.
3. Ana Sojo: «La política social en la encrucijada: ¿opciones o disyuntivas?» en Jorge Carpio e Irene Novacovski (comps.): *De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*, FCE - Siempro - Flacso, Buenos Aires, 1999.

propósito de este artículo hacer un recuento minucioso del proceso de precarización de las condiciones de trabajo por lo que solo se mencionarán algunos de los rasgos que lo definen. De las transformaciones registradas en el mercado laboral, hay cinco elementos que por su relevancia, constituyen indicadores sustantivos de la desestructuración de las relaciones de trabajo, por lo que es necesario referir de manera puntual, a cada uno de ellos: a) La fuerte expansión del autoempleo o trabajo por cuenta propia; b) La caída relativa del trabajo asalariado en las actividades industriales y el incremento de la ocupación en los sectores de comercio y servicios; c) El marcado crecimiento del empleo por tiempo determinado y a jornada parcial; d) El aumento del subcontratismo y de la maquila domiciliaria; e) El crecimiento del empleo en relación de dependencia bajo nuevas condiciones contractuales. Este tipo de convenios rompe con dos de los principios que tradicionalmente habían servido de soportes al modelo contractual anterior: la estabilidad en el empleo y la permanencia del trabajador en puestos que eran relativamente similares en las funciones productivas que debían desarrollarse. La combinatoria de estos factores y de otros elementos que hacen al funcionamiento del mercado laboral en el contexto de los nuevos criterios de la flexibilidad contractual, son responsables, en parte, de la mayor segmentación de los sectores asalariados de la población trabajadora, de la crisis de representación que afecta a las grandes centrales obreras y del debilitamiento progresivo de las bases sociales que fueron el sustento de los movimientos populistas de «viejo cuño» y de las fuerzas políticas de tradición marxista (trabajadores urbanos; empresarios vinculados al mercado interno; burocracia y sectores medios del comercio y los servicios)[4].

Estado y democracia desde la óptica neoliberal

Es posible organizar el debate sobre estas dos grandes áreas temáticas de acuerdo a los postulados de tres concepciones principales:

a) El llamado «viejo consenso». El enfoque alude al paradigma que prevaleció en las ciencias sociales latinoamericanas desde los años 30 hasta mediados de la década de los 70. Este consenso –entendido como un bloque histórico que posibilitó la instauración de la estrategia de desarrollo basada en la industrialización protegida y en el mercado interno– le asignaba al Estado un papel predominante como factor de estímulo a las actividades productivas y como instancia de protección tutelar de la fuerza de trabajo. Michael Hansenne, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explicó, de manera transparente, en su Informe Anual de 1992 a la Conferencia Regional Americana, que durante ese periodo, de algo más de cuatro décadas, definir políticas sobre cuestiones laborales era referirse a «la pre-

4. Marcelo Cavarozzi: «Populismos y partidos de clase media. Notas comparativas» en Carlos Vilas (comp.): *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, Conaculta, México, 1996. Para un estudio de la crisis de los populismos latinoamericanos, v. Felipe Burbano de Lara (ed.): *El fantasma del populismo*, Ildis - Flacso - Nueva Sociedad, Caracas, 1998.

eminencia del Estado como regulador y garante de las metas de empleo, los sueldos y las condiciones de trabajo; ello sin prestar gran atención al mercado y, en la mayoría de los casos, solo con una participación simbólica de los actores sociales».

b) El enfoque neoliberal. Desde este marco se afirma que el Estado debería intervenir lo menos posible para no interferir en el libre movimiento de las fuerzas del mercado. De acuerdo a esta perspectiva las organizaciones sociales y las instituciones y empresas públicas heredadas del antiguo «Estado desarrollista» son impedimentos, y de algún modo una amenaza, para alcanzar la modernización de la planta productiva. Un Estado y una sociedad menos protagónicos son el prerrequisito para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.

c) La visión del «crecimiento con equidad». El aumento de la pobreza, de la concentración del ingreso y la generalización del subempleo y la desocupación motivó que algunos organismos internacionales como la Cepal, revaloraran el papel de la intervención gubernamental en algunos espacios de la vida social, en particular en el ámbito del diseño e instrumentación de los programas de combate a la pobreza y en el mercado de trabajo. Aunque se redefine el rol que deben jugar las instancias públicas, se propone un accionar menos predominante para el Estado del que se le adjudicaba en el «viejo consenso». El principal punto de divergencia entre este enfoque y los dos anteriores reside en las funciones que se le atribuyen a las organizaciones sociales y a las diversas expresiones *societales* que pugnan por la gestión directa de los ciudadanos en la producción y distribución de ciertos bienes y servicios básicos[5].

Lo cierto es que desde inicios de los 80, América Latina conoció en carne propia la implantación de políticas de ajuste, cuando la prioridad era disciplinar las variables macroeconómicas que se descontrolaron con la crisis de la deuda, y poco después, a mediados de esa misma década, la tenaz aplicación de programas económicos destinados a establecer un nuevo patrón de acumulación. Es importante señalar que el recetario de medidas económico–sociales que llegó a nuestros países tenía una cobertura ideológica cuidadosamente elaborada en los medios académicos de los países industrializados. En efecto, el paquete que se exportó a la región tenía dos novedades centrales. Una de ellas era el ensamble de los postulados neoliberales con *valores democráticos* de origen neoconservador. Cabe recordar que en el cuerpo doctrinario del liberalismo clásico las formas institucionales democráticas habían ocupado un lugar expresamente subordinado al instrumental de carácter propiamente económico[6]. El proyecto neoconservador que llegó a América Lati-

5. René Cortázar: «Globalización y puestos de trabajo. Una perspectiva latinoamericana», en V. Tokman y G. O'Donnell (comps.): ob. cit.
6. Ana María Ezcurra: *¿Qué es el neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente*, Lugar Editorial - Ideas, Buenos Aires, 1998.

na retomaba y vigorizaba la noción de *capitalismo democrático.* Este es un vector clave, ya que forma parte del núcleo constitutivo de un nuevo consenso ideológico que postula la adhesión a la economía de libre mercado y a la democracia liberal y afirma la relación necesaria entre ambos principios. De esta manera, para las naciones del hemisferio Norte la «democratización global» ascendió a la categoría de cuestión de seguridad. En los 80 esta racionalidad comenzó a ser gradualmente impuesta en nuestros países, el patrocinio de la democracia parlamentaria en el subcontinente significó un vuelco de la visión conservadora tradicional hacia la idea de que las dictaduras de corte «pinochetista» representaban un escollo para el manejo de la cuestión social y para el establecimiento de un marco institucional que fijara nuevas reglas del juego.

La crisis de los regímenes dictatoriales, en particular en Sudamérica, coincidió con un marcado proceso de valorización de la institucionalidad democrática por parte de amplios sectores del espectro político. Esta oleada de recuperación del pluralismo y de las libertades ciudadanas incluyó a segmentos de la izquierda que habían renegado, durante los años 60 y 70, de las formas democráticas, de los procesos electorales y en general, de todos aquellos dispositivos asociados a la democracia parlamentaria. La misma izquierda que se apresuró a ahogar bajo las consignas atronadoras de la guerra popular y de la insurrección armada a los gobiernos surgidos de las elecciones que se efectuaron 10 o 15 años antes, propusieron en los 80 la instauración de un gobierno representativo. Y aquí cabe una aclaración, puede concebirse a la democracia como un método para la formulación y toma de decisiones en el ámbito estatal o bien imaginar la democracia como una forma de vida, como un modo cotidiano de relación entre hombres y mujeres mediante el cual se fijan reglas comunes para llevar a cabo el conjunto de actividades de una sociedad[7]. Expresado de otro modo, es la diferencia que existe entre una democracia *gobernada* y una democracia *gobernante.* En el primer caso la participación popular tiene reservado un papel secundario, de manera periódica las leyes que norman los procesos electorales convocan a los ciudadanos para que decidan, mediante el voto universal, cuál de las minorías potencialmente dirigentes debe asumir la responsabilidad de ejercer la administración de las instituciones públicas. Una vez cumplido este acto lo disuelve como «sujeto con identidad propia», el ciudadano pierde estatus como actor colectivo y el pueblo vuelve a sus tareas cotidianas.

Distinto es el caso de la democracia *gobernante* que procura abrir espacios y ampliar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la toma de decisiones de todas aquellas cuestiones que atañen al conjunto de la sociedad. De acuerdo a los postulados de esta concepción, las instituciones democráticas solo adquieren ese verdadero carácter cuando el pueblo participa en la identificación y solución de los asuntos

7. José Nun: *La rebelión del coro. Estudios sobre la racionalidad política y el sentido común*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.

que conciernen a la comunidad y no exclusivamente en la elección de quienes tendrán a su cargo el desempeño de las funciones públicas. La normalización de la vida política en los países que dejaban atrás procesos dictatoriales, dio lugar a la instauración de gobiernos democráticos con características que se aproximan a la primera de las tipologías mencionadas. En efecto, la convocatoria a elecciones y el reestablecimiento de la actividad parlamentaria, volvió a otorgar centralidad a los partidos políticos y relegó el papel de las organizaciones sociales. La jerarquización de los mecanismos propios de la formalidad democrática redujo los espacios de participación popular que no se expresan bajo las formas convencionales de los partidos.

¿Ebullición ciudadana o fastidio de la política?

Desde los años 1930, el Estado fue percibido en nuestros países como el gran demiurgo de la historia, era el artífice del desarrollo industrial, de la modernización del campo y el garante del bienestar social para las clases populares. Fueron demasiadas esperanzas depositadas en una institución política. Casi 50 años después y en medio de una fuerte ofensiva neoconservadora, se puso en marcha un proceso de demolición de las antiguas estructuras públicas. Surgió entonces un nuevo tótem: el mercado. Se necesitaron poco más de 20 años para saber que este ídolo tenía pies de barro. Era preciso que golpeáramos la cabeza contra la pared para entender que el mercado sin controles destrozaba la convivencia democrática y volvía ficticias las libertades ciudadanas. Se produjo entonces una súbita adhesión al concepto de sociedad civil, categoría de larga prosapia que habían rehabilitado los disidentes de Europa del Este en los años 70 y que los sociólogos estadounidenses recibieron con beneplácito[8]. Pero el llamado de alerta llegó un poco tarde, este retorno, intelectual y político al «reino ciudadano» se produjo cuando el daño ya estaba hecho. La mayor segmentación de los grupos y clases sociales que habían sido el soporte estructural y referente político fundante de las sociedades latinoamericanas, agotó también los horizontes simbólicos de las fuerzas políticas tradicionales. Esta crisis de representación, notoria a partir de la implantación de la estrategia neoliberal generó, por parte de segmentos importantes de la sociedad, primero indiferencia y después escepticismo hacia los partidos históricos. Los que habían sido depositarios naturales de las expectativas populares se transformaron, a los ojos de la población, en fuente de corrupción y de promesas incumplidas.

La réplica a este proceso de descreimiento ha sido el surgimiento de liderazgos locales, más conocidos en sus municipios y comunidades y fuertemente ligados a los intereses inmediatos de sus vecinos. La experiencia argentina sirve para ilustrar este fenómeno de conformación de agrupamientos municipales que han logrado, en muchos casos, salir victoriosos en las elecciones para

8. Puede consultarse el detallado estudio sobre los usos del concepto de sociedad civil en la sociología norteamericana en Benjamín R. Barber: *Un lugar para todos*, Paidós, Buenos Aires, 2000.

designar a los titulares de las comunas y a los integrantes de los consejos vecinales. La emergencia de estas fuerzas de raíz municipal reconoce, en Argentina, algunos antecedentes valiosos de *autogestión popular*. En 1981 se inició la ocupación ilegal de terrenos en la zona sur del conurbano de Buenos Aires, con estos hechos dio comienzo una nueva modalidad de producción del hábitat y de organización social de los sectores populares[9]. Estas ocupaciones ilegales de tierras se caracterizaron por ser masivas y por planificar el uso del suelo y el desarrollo futuro del barrio. A partir de criterios autogestionarios, cientos de familias se instalaban en los predios baldíos, trazaban los lotes y las calles con el fin de asignar un terreno a cada familia, dejar espacios libres para las áreas de uso colectivo, y construir la red eléctrica, las tuberías de agua potable, los centros de salud y guarderías. Si quisiéramos identificar el aspecto de mayor originalidad en este tipo de experiencias hay que apuntar el particular modo de vincularse con la ciudad que proponen estos nuevos asentamientos. Constituyen un intento de ser reconocidos por las autoridades y, al mismo tiempo, asimilarse al resto del núcleo urbano mediante una política de autorganización y de hechos consumados[10]. El agrupamiento de los pobladores –que en muchos casos fueron la base de las futuras asociaciones vecinales– se estructuraba a partir de tres instancias: Comisión Directiva, Comisiones Especiales y el Cuerpo de Delegados; los procedimientos para tomar decisiones eran la asamblea y la elección directa.

Es importante señalar un rasgo sustantivo en este tipo de organización autogestiva. Todos los grupos vecinales se construyeron sobre la idea de la autonomía respecto de la competencia político-partidaria. De esta forma los representantes de los vecinos se definían como «apartidarios» o «apolíticos». Esta conducta favoreció la unidad organizativa de los barrios, al colocar la competencia política fuera de sus límites y acotar las diferencias entre vecinos puertas adentro. Puede decirse que había un límite visible entre las organizaciones sociales, surgidas de demandas específicas de la sociedad civil, y el sistema político. Las agrupaciones vecinales que surgieron durante los 80 y que se extendieron en los últimos 10 años, muestran algunos cambios importantes con respecto a las experiencias que se acaban de mencionar. Se mantuvo cierto desdén y desprecio hacia las dirigencias políticas tradicionales pero, al mismo tiempo, se expresó un abierto interés por disputar electoralmente el control de las comunas[11]. La señal de identificación que exhiben las organizaciones vecinalistas sigue siendo el descreimiento común que sienten por las antiguas fuerzas políticas y todas coinciden es un aspecto que puede constituirse en un punto vulnerable: la heterogeneidad de los sectores de población que las conforman. Es posible reconocer a trabajadores de la indus-

9. Denis Merklen: «Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires» en *Nueva Sociedad* Nº 149, 5-6/1997, Caracas.
10. Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal: *Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989.
11. Torcuato Di Tella: «Los síntomas de cierta ebullición» en *Clarín*, 22/4/01, Buenos Aires.

tria, burócratas y comerciantes, técnicos y profesionales, desempleados y subocupados o grupos marginales cuyo objetivo principal es obtener un lugar donde vivir. La composición ideológica de las bases sociales del movimiento «vecinalista» es variada, en ciertos casos se encuentran expresiones cercanas a corrientes políticas históricas como el peronismo y la Unión Cívica Radical, en otros parecen responder a fuerzas conservadoras de confusa procedencia, incluidos grupos que colaboraron con la dictadura militar. No obstante, las agrupaciones vecinales efectúan sus convocatorias con carácter amplio, sin discriminar según posturas ideológicas o antecedentes partidarios. El objetivo político central es jerarquizar el rol municipal, lograr una mayor autonomía de las comunas y procurar que las elecciones en las que se vota para designar a los presidentes municipales y asambleístas, se efectúen de manera separada de las provinciales o federales. Estas banderas, junto a la prédica machacona contra la corrupción y la inseguridad, constituyen el programa mínimo de la mayoría de estas organizaciones.

El vecinalismo abre un espacio de lucha para la persona desempleada que ya no cuenta con un sindicato al cual llevar sus demandas y lograr que lo defienda, y para los trabajadores precarios, los ocupados por cuenta propia, los subempleados y para aquellos que aún teniendo una inserción laboral estable no confían ni se sienten representados por las antiguas estructuras gremiales ni por las ofertas que provienen de los partidos políticos. Desde el Estado se hacen reiterados esfuerzos de cooptación. Durante la última dictadura que gobernó Argentina en el periodo 1976-1983, se trató de armar lazos con la sociedad luego de los primeros años de terror. Vecinos «reconocidos» de las comunidades eran elegidos para reemplazar a los militares que administraban los municipios. En 1983, con el reestablecimiento de la democracia, algunos decidieron presentarse a elecciones, con este fin crearon sus expresiones vecinales organizadas políticamente. El núcleo a partir del cual suelen articular su discurso los movimientos vecinalistas es la exaltación de la figura «del buen vecino». Por lo general se trata del ciudadano atraído por los valores que encarnan una «cuidada y austera» administración de los recursos municipales y de la prestación adecuada de los servicios básicos que se esperan de un Estado mínimo[12]. El éxito electoral de los candidatos vecinalistas se explica, en buena medida, por ser receptores del voto ciudadano que desea expresar su rechazo a la política bajo sus formas conocidas. Se entiende que una manera de «despolitizar» el voto es apoyar a un candidato que se presenta como un «buen vecino», que se hace cargo de la gestión cotidiana de los problemas de su entorno. Con palabras simples y sin rodeos, Alberto Groppi –uno de los numerosos jefes comunales surgidos del movimiento vecinalista– define los postulados que inspiran a las organizaciones municipales: «El vecinalismo no tiene una ideología a nivel macro. Es ideología simple, un espíritu de servicio permanente por la gente que a uno lo rodea». Otro presidente municipal, Ricardo Ubieto, de la comuna de Tigre, señala que

12. Héctor Pavón: «Los partidos que vienen de los barrios» en *Clarín*, 22/4/01, Buenos Aires.

el corazón del problema está en que se ha roto la relación entre la gente y la política porque ésta ya no resuelve ninguna de las necesidades cotidianas de los sectores sociales ... el vecinalismo es la soberanía del bache [hueco], de la luz eléctrica, ver como prestas mejores servicios y no meterte en los grandes problemas ya que no los vas a solucionar ...[13]

El auge del «vecinalismo», a mediados de los 80, coincidió con el surgimiento, y multiplicación de las redes solidarias. Un relevamiento, publicado en mayo de 2000, que efectuaron el BID y el PNUD muestra que hay más de 100.000 organizaciones comunitarias en Argentina[14]. Se trata de entidades de bien público, sin fines de lucro, que se forman con el único propósito de defender las demandas ciudadanas. En el capítulo de conclusiones del documento «Indice de desarrollo de la sociedad civil de la argentina», se menciona que estos agrupamientos que nacen sin patrocinio estatal, duplican a las instituciones educativas y son hasta siete veces más numerosos que las de salud. En 1996 se creó el Foro del Sector Social con el fin de fomentar la participación ciudadana. En un material de difusión, el Foro se pregunta: «¿Qué podemos hacer?». El mismo texto propone:

Cuidar a un niño solo, cocinar para gente de la calle, acompañar a un discapacitado, leerle a un enfermo. Es que ser solidario no es sólo dar comida sino también dar una mano, ser respetuosos. La sociedad ya maduró. Ya no quiere ser más parte de ese Estado paternalista que se encargaba de todo, ahora la gente tiene iniciativas y actúa.[15]

Otro fenómeno de especial relevancia es la aparición de mercados en los que se adquieren y venden diversos bienes y servicios mediante el sistema de trueque. Estos mercados comenzaron a mediados de los 90, impulsados por miles de trabajadores desempleados y subocupados como un mecanismo alternativo al sistema formal de comercio. En apariencia, el sistema de trueque no se diferencia de un acto de compra-venta rutinario, ya que cada artículo tiene un valor en «créditos». Pero estos billetes no son otra cosa que el valor del trabajo que cada persona aporta: no son intercambiables por dinero, tampoco reemplazan a la moneda corriente ni generan ningún interés. Carlos De Sanzo, uno de los fundadores de la Red Global del Trueque Solidario señala que:

... cualquier club de trueque está en condiciones de darle a un desocupado respuesta a cortísimo plazo: barrer o pintar o, quizá su esposa, atender a un enfermo o preparar comidas ... El trueque funciona como interfase entre el mercado social y el mercado formal y opera en los intersticios de la economía: con las butacas que quedan vacías en el teatro, con las horas que quedan sin trabajar, con la mercadería que queda sin vender[16].

El primer club de trueque se fundó en 1994. Hoy son más de 800 y hay 90 mil familias cuyo sustento depende total o parcialmente del trueque ... sumando

13. Testimonios citados por H. Pavón: ibíd.
14. Mariana Iglesias: «Cada vez hay más redes solidarias en el país» en *Clarín*, 26/8/00, Buenos Aires.
15. Palabras de los dirigentes del Foro del Sector Social citadas en el informe M. Iglesias, ibíd.
16. Pedro Lipcovich, «El trueque, un fenómeno que crece con la depresión de la economía en *Página 12*, 26/3/01, Buenos Aires.

casi 500 mil personas (ibíd.). Bajo la forma de asociaciones vecinales o mediante este curioso sistema de mercados autogestivos, la sociedad civil busca recomponer lazos de solidaridad que se perdieron con el debilitamiento de las anteriores formas de representación popular. En aquellos espacios donde los sindicatos ya no llegan –el incremento del desempleo, del trabajo precario y de la ocupación domiciliaria le restaron bases sociales– y donde los partidos tradicionales dejaron de actuar como grandes agregados de la voluntad «nacionalista-popular», las demandas de la población son atendidas por instancias peculiares que genera la propia sociedad civil.

No obstante, las experiencias autogestionarias y vecinalistas abren múltiples interrogantes. Para la socióloga Maristella Svampa, de la cátedra Simón Bolívar del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona, los riesgos que enfrentan estos movimientos sociales son muy altos. «¿Puede la política convertirse en la sola gestión de los problemas cotidianos de la gente, ignorando las definiciones más generales, que están detrás de las decisiones de más largo plazo y que tienen que ver con la idea de sociedad que tenemos y queremos?»[17]. Esta marca identitaria de los representantes del movimiento vecinalista –estar alejados del juego político tradicional– puede transformarse en el árbol que oculte el bosque, al no advertir que la política es una tarea colectiva que se nutre del mundo de los valores y que implica opciones, ideologías y creencias.

Los riesgos que se señalan no descalifican las experiencias de *democracia directa* y autogestión que se describen en este artículo. El vecinalismo es un fenómeno que ha comenzado a crecer, prácticas similares a las que se encuentran en Argentina se registran también en Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay. Con elementos particulares, dictados por la rudeza del mundo campesino en el que nació, puede incluirse al movimiento de los Sin Tierra en Brasil, tal vez lo más logrado en cuanto al impulso de labores productivas y prestación solidaria de servicios educativos y de salud.

Es posible que estas nuevas estructuras no sustituyan a las antiguas y, por el contrario, se articulen con ellas. El desafío que tendrán que resolver es la dificultad de vinculación con formas políticas de mayor alcance, provincial o nacional, sin que se diluyan su especificidad y sus valores. En este afán de crecer –en Buenos Aires se constituyó el Frente Vecinal Provincial con el fin de competir en las elecciones legislativas de 2001– se anida el riesgo de la fagocitación a partir de acuerdos que establezcan con fuerzas políticas nacionales. Renunciar a las tentaciones de la ideología parece un acto de afirmación de la pureza de las demandas ciudadanas. Sin embargo, puede significar el ingreso a un universo lúdico en el que se repliquen imágenes distorsionadas de la realidad social y de cuyos espejismos solo se logra salir por el camino de la política.

17. Citado por H. Pavón: ob. cit.